

125-19.61

Santiago de Cali, 07 de junio de 2017

CACCI 3730

Doctor  
ORLANDO ZUÑIGA MOSQUERA  
Carrera 5 No. 26-59 Oficina No.1 Torre A  
Conjunto Empresarial "Torres del Parque"  
Teléfono (571) 3367608  
Bogotá D.C.

ASUNTO: Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 3680 DC-34- 2016  
CACCI 4321 de Junio 15 de 2016 y CACCI 4529 de junio 23 de 2016.  
Radicación 2016 EE0074418 de junio 10 de 2016 CGR  
Traslado Documento 2016ER0056826 CGR

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con las presuntas irregularidades administrativas en el Municipio de Jamundí –Valle, inherentes al cobro coactivo que se adelantó en contra de la sociedad "Apuestas Unidas de Jamundí S.A." en el cual presuntamente se suplanto el informe del 11 de agosto de 2015 del investigador Jaime Vergara Castrillón, investigación que adelanto por la denunciada que radicó según CACCI 11375 a este ente de control y que *"curiosamente con fecha 18 de agosto de 2015, el informe inicial del investigador fue suplantado o sustituido por otro que guarda la misma apariencia del original y el mismo número de radicación, pero cuyo contenido es diametralmente opuesto al inicial presentado por el investigador Vergara C."*

Por lo anterior solicita que *"se llame a declarar al investigador universitario de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca para que en la declaración se ponga de presente el informe que aparece como su autoría, con el fin de que el servidor público se pronuncie al respecto."*

Mediante oficio CACCI 4223 del 24 de junio de 2016 esta Dirección realiza Auto de Acumulación teniendo en cuenta que se trata del mismo tema al solicitar reasumir la investigación tendiente a recuperar los recursos a favor del Municipio de Jamundí por el proceso de cobro contra Apuestas Unidas de Jamundí, para continuar con las actuaciones propias de la responsabilidad fiscal.

Nuevamente se realiza Auto de Acumulación de junio 28 de 2016 teniendo en cuenta que el ciudadano Casimiro Delgado Larrahondo, eleva queja contra funcionarios judiciales y el Excontralor del Valle y actual funcionario de la Contraloría General de la Republica ante el Senador Iván Cepeda Castro el 24 de mayo de 2016 y este mediante oficio Cacci 4321 de junio 15 de 2016 lo remite a este ente de control fiscal.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana, mediante visita fiscal al Municipio de Jamundí, para tal fin comisionó

al Profesional Universitario adscrito a la Dirección Técnica de Infraestructura Física, Jaime Vergara Castrillón.

De la visita fiscal realizada al mencionado Municipio se obtuvo el siguiente resultado:

## **1. INTRODUCCION**

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, basado en el principio de Responsabilidad, compromiso y transparencia de la información que aportan los sujetos de control, y conforme al mandato Constitucional y la normatividad legal vigente, ha desarrollado el presente Informe debido a la presunta irregularidad proferida mediante denuncia en contra de la empresa “Apuestas Unidas de Jamundí” acerca del “Cobro del impuesto a los Espectáculos Públicos y Juegos de Suerte y Azar” en el Municipio de Jamundí con fecha diciembre de 2016, que permitirá un conocimiento amplio de la situación legal por la cual presuntamente se ha omitido el cobro del impuesto referido

En el presente informe se presenta el desarrollo normativo sobre el impuesto a los juegos de suerte y Azar, con el propósito de esclarecer la ocurrencia o no de presuntas omisiones a través de los actos administrativos contenidos en el expediente aportado por el denuncia y la administración de Jamundí, frente a la viabilidad legal del cobro de dicho impuesto.

El resultado final de la visita realizada para los mencionados efectos, se consolido en el presente informe, con el fin de dar a conocer a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder satisfactoriamente a los requerimientos del denunciante.

## **2. ALCANCE DE LA VISITA**

Con el fin de atender denuncia radicada según CACCI 3680 del 19 de Mayo de 2016 interpuesta por Orlando Zúñiga Mosquera que tiene relación con una denuncia instaurada el 27 de octubre de 2014 mediante CACCI 11375 y aportada la trazabilidad de su procedimiento, este fue desarrollado por la Contraloría Departamental en el año 2015, que conforme al conocimiento normativo en esta materia, se entregó un informe como resultado de los estudios minuciosos de la jurisprudencia conocida. A la fecha y en la oportunidad de la actual denuncia, se utilizó el pronunciamiento del Consejo de Estado proferido el 25 de Abril de 2016 mediante radicación No. 11001-03-15-000-2015-02768-0, y es así como se retoma la anterior denuncia citada en el oficio del denunciante Radicada con CACCI 11375 del 27 de Octubre de 2014, con sus respectivos anexos del proceso para la obtención del recaudo de los impuestos de “Espectáculos y Juegos de Azar” regulados por la Ley 12 de 1932, y que fue reestablecido mediante la Ley 69 de 1946 y cedido a los municipios mediante la Ley 33 de 1968; lo anterior se observó con aplicación a las vigencias del 2006 a 2010 y que subsiguientemente estas acciones tienen consecuencias hasta la fecha de hoy y está respaldado con el documento jurídico como punto de partida que mira la legalidad de la norma que se alega respecto al cobro que se lleva de los tributos de los juegos de azar, por lo tanto la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se dispuso a ordenar la práctica de algunas pruebas a efectos de

esclarecer los hechos denunciados materia de presuntas inconsistencias por la posible omisión del cobro del impuesto mencionado, en sospechada contravención de la presunta obligatoriedad que subsume a la administración municipal actualmente en el proceso de captación tributaria, con el fin de establecer la veracidad de las actuaciones frente al probable hecho irregular hasta la fecha.

Para el anterior procedimiento se estableció visita fiscal por parte de la Contraloría Departamental del Valle en función de conseguir las pruebas necesarias y compararlas con la documentación revisada y aportada por el denunciante que debe reposar en los expedientes o archivos del municipio manifestando la trazabilidad para estructurar esta denuncia en conjunto con el cúmulo de la documentación aportada por el denunciante en dos periodos consecutivos 2014 y 2016.

Conforme a la visita programada por la Contraloría Departamental del Valle los días 21 de Septiembre y los días 1, 2, 3 y 4 de Noviembre de 2016, para el municipio de Jamundí, se requirió los documentos necesarios para resolver la denuncia los cuales se encuentran en el expediente que reposa en la Secretaría Jurídica del Municipio.

### **3. LABORES REALIZADAS**

De acuerdo al procedimiento de visita fiscal de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, el día 21 de Septiembre, 1, 2, 3 y 4 de Noviembre de 2016 se levantaron actas por cada evaluación a los diferentes funcionarios de la administración, el señor Alcalde, el Tesorero, La Secretaria de Hacienda y La Secretaria Jurídica del Municipio con el fin de verificar el conocimiento del caso para realizar el informe.

Para poder confrontar la denuncia se hizo el requerimiento mediante oficio radicado en ventanilla única del Municipio de Jamundí – Valle No. 13365 del 1 de Noviembre de 2016, con los siguientes documentos:

- ✓ Copia del Contrato de prestación de servicios del abogado ORLANDO ZUÑIGA MOSQUERA.
- ✓ Sentencia de la tutela de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo.
- ✓ Sentencia de tutela de segunda instancia proferida por el Juzgado 7 Civil del Circuito de Cali.
- ✓ Mandamiento de pago contenido en la Resolución 0064 del 28 de enero de 2013 en contrato de la Sociedad APUESTAS UNIDAS DE JAMUNDI S.A.
- ✓ Solicitud presentada por el representante legal de la sociedad APUESTAS UNIDAS DE JAMUNDÍ S.A.
- ✓ Copia de la Resolución 0036 del 10 de Septiembre de 2013 mediante la cual el Tesorero revoca oficiosamente el mandamiento de pago y liquidación de aforo.
- ✓ Copia del Departamento jurídico de quien proyectó este acto jurídico.
- ✓ Memorial de La Sociedad APUESTAS UNIDAS DE JAMUNDÍ S.A donde se solicita no se le embarguen las cuentas firmado por Blanca Villegas como representante legal de APUESTAS UNIDAS DE JAMUNDÍ S.A.
- ✓ Copia de la demanda instaurada por Blanca Villegas.
- ✓ Derecho de petición elevado por el señor Alcalde municipal de Jamundí de la época.
- ✓ Derecho de petición a la Doctora Marleny Muñoz por parte del abogado Orlando Zúñiga.

- ✓ Respuesta del derecho de petición.
- ✓ Tutela del derecho de petición y la contestación definitiva de la tutela.
- ✓ Respuesta al Derecho de petición rendida por el alcalde Municipal de Jamundí.
- ✓ Copia de la solicitud de revocatoria.
- ✓ Copia de Resolución de nombramiento, Acta de posesión, cédula de ciudadanía, hoja de vida en formato único, certificado del último salario devengado, declaración de bienes y rentas y póliza todo riesgo del Mandatario Dr. JOHN FREDDY PIMENTEL y los funcionarios responsables de todos los trámites inherentes al asunto MARLENY MUÑOZ SANCHEZ, GUSTAVO ADOLFO HERRERA RIVERA y ORLANDO ZÚÑIGA MOSQUERA.

#### **4. RESULTADO DE LA VISITA**

##### **EMPLAZAMIENTO**

La información suministrada por las partes (municipio de Jamundí y denunciante) en virtud del caso de las apuestas de Jamundí por la denuncia radicada mediante CACCI 11375 del 27 de Octubre 2014, que explicaba sobre la presunta omisión en la obtención del recaudo de los impuestos de “Espectáculos y Juegos de Azar” y de la cual se había hecho un pronunciamiento destacando la presunta contravención a la norma, nuevamente se realizó visita de Inspección a las dependencias de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal del municipio elaborando un acta con el levantamiento del Control de legalidad conforme al artículo 125 de la Ley 1474 de 2011 para lo cual se informó sobre la presunta omisión en el cobro de los tributos y la elaboración de los hallazgos conforme a lo analizado hasta la fecha, destacando la necesidad de volver a profundizar y valorar la documentación aportada por la Entidad en el transcurso de la visita de conformidad con la normatividad vigente para la época de los hechos, estimando la obligatoriedad o no, en el cobro del impuesto a los espectáculos y juegos de azar.

Es pertinente expresar que, al momento de iniciarse las presentes diligencias fiscales, el denunciante aportó copia de dos sentencias de Tutela provenientes de: Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Jamundí con Sentencia de Tutela No. 031 (Primera Instancia) del 29 de Agosto de 2011 y del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali con Sentencia de tutela No. 90 del 5 de Octubre de 2011 (Segunda Instancia), en las que se acotó que el cobro coactivo por el impuesto a los Juegos de Suerte y Azar que se iniciaba en contra de la Sociedad APUESTAS UNIDAS DE JAMUNDÍ S.A., no vulneraba el Derecho Fundamental del Debido Proceso, y por lo tanto también confirma el resuelve de la sentencia 031 del Juzgado Segundo donde se deniega las pretensiones de la Sociedad.

Sin embargo, debe aclararse que conforme al artículo 49 de la Ley 643 de 2001 el legislador, prohibió gravar a los departamentos, distrito o municipios, con impuestos, tasas o contribuciones, fiscales o parafiscales distintos a los consagrados en el artículo 48 de la citada norma.

En línea con lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C – 584/01 sobre la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por José Manuel Álvarez Zárate contra el artículo 12 de la Ley 69 de 1946; el literal c) (parcial) del artículo 3o. de la Ley 33 de 1969 y los artículos 227 e inciso 1o. del 228 del Decreto 1333 de 1986 referente al impuesto sobre los denominados “juegos permitidos”, en la cual resuelve inhibirse para pronunciarse de fondo en relación con la constitucionalidad de las citadas normas al

establecer que se habría producido la derogatoria de éstas por la Ley 643 de 2000 “*por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar*” habida cuenta, de la prohibición de gravar el monopolio regulada mediante el artículo 49 de la misma.

Así mismo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en Sentencia del 30 de agosto de 2016 con radicación No. 05001-23-31-000-2005-05531-01(21834), Consejera ponente, Martha Teresa Briceño de Valencia, realizando un recorrido histórico de los antecedentes normativos sobre el impuesto a los juegos de suerte y azar, el cual se transcribe para objetivos didácticos, determino de igual modo su derogatoria.

*“(…) El artículo 7 de la Ley 12 de 1932 estableció un impuesto del 10% «sobre el valor de cada boleta de entrada personal a espectáculos públicos de cualquier clase, y por cada boleta o ticket de apuesta en toda clase de juegos permitidos, o de cualquier otro sistema de repartición de sorteos».*

*Si bien dicho «impuesto de juegos permitidos» fue creado con carácter temporal, para sufragar los gastos de la guerra con el Perú, el artículo 12 de la Ley 69 de 1946 lo convirtió en permanente. Luego, mediante el artículo 3 de la Ley 33 de 1968, el tributo fue cedido a los municipios y al Distrito Especial de Bogotá.*

*Al expedirse el Código de Régimen Municipal (Decreto Ley 1333 de 1986) se adoptó en los artículos 227 y 228 las normas vigentes sobre el impuesto de juegos permitidos. El artículo 227 dispuso que «De conformidad con la Ley 69 de 1946, está vigente el impuesto del diez por ciento (10%) del valor de cada boleta o ticket de apuestas en toda clase de juegos permitidos a que se refiere el ordinal 1o. del artículo 7o. de la Ley 12 de 1932». El artículo 228, por su parte, previó que ese impuesto es de propiedad exclusiva de los municipios y del Distrito Especial de Bogotá y que a ellos corresponde organizar y asumir su administración y recaudo.*

*Ahora bien, el artículo 336 de la Constitución Política dispuso que «Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud» y el artículo 42 de la Ley 10 de 1990, modificado por el artículo 285 de la Ley 100 de 1993, declaró como arbitrio rentístico de la Nación, la explotación monopólica, en beneficio del sector salud, de las modalidades de juegos de suerte y azar diferentes de las loterías y apuestas permanentes existentes y de las rifas menores.*

*Frente al **impuesto de juegos permitidos** previsto en las normas antes analizadas y su vigencia a partir de lo establecido en la Ley 10 de 1990 y el artículo 336 CP, la Sala de Consulta y Servicio Civil en el Concepto 495 del 30 de marzo de 1993, puntualizó que:*

*«10) De todo lo anterior se concluye, que el impuesto sobre el valor de las boletas o tickets de apuesta de toda clase de juegos permitidos, cedido por la Nación a los Municipios y al Distrito Capital, tiene el carácter de renta sin destinación específica porque aunque la finalidad inicial para la cual se creó era el servicio de la deuda por los gastos de la guerra con el Perú, al ser restablecido en el año 1946 no se le dio destinación específica.*

11) *De otra parte, la Ley 10 de 1990, determina que el servicio público de salud será de cargo de la Nación que para obtener ingresos explotará como monopolio todas las modalidades de juegos de suerte y azar, diferentes a las loterías y apuestas permanentes existentes (art. 1º y 42 Ley 10 de 1990).*

12) ***De manera que las rentas obtenidas por la Nación en razón de la explotación de todas las modalidades de juegos de suerte y azar, se deben destinar al sector salud (Art. 336, inc. 4º de la Constitución Nacional). Y el impuesto creado sobre el valor de las boletas o tiquetes de apuestas de toda clase, constituye una renta de los municipios beneficiados y del Distrito Capital, sin destinación específica.***

13) ***De todo lo anterior se deduce, que el tributo mencionado está vigente y es de propiedad exclusiva de las entidades territoriales mencionadas, y, por lo mismo, es a los Concejos de estas entidades a los que corresponde regular lo concerniente a este gravamen (art. 338 C.N.)».*** (Negrillas fuera de texto)

*Con base en lo anterior, se distinguen dos pagos que recaían sobre la explotación de juegos y azar, por una parte, el impuesto sobre juegos de suerte y azar que fue cedido a los municipios mediante la Ley 33 de 1968, el cual no perdió vigencia con la expedición de la Ley 10 de 1990 modificada por la Ley 100 de 1993 y, de otra parte, lo pagado por concepto de los derechos por la explotación del monopolio.*

*En la sentencia C-537 de 1995, en la cual la Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de las normas sobre **impuestos a los juegos permitidos**<sup>1</sup>, esa Corporación sostuvo que no existe incompatibilidad entre el concepto de monopolio de juegos de suerte y azar como arbitrio rentístico y la facultad impositiva que desarrollan los municipios y el Distrito de Bogotá. La Corte acogió el criterio expuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil y concluyó que unas son las rentas obtenidas por la Nación por la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar y otro el impuesto sobre el valor de la boleta o tiquete que es una renta de los municipios sin destinación específica.*

*Por lo anterior, esta Sala había precisado que «En efecto, **no son excluyentes los conceptos de monopolio como arbitrio rentístico y la facultad impositiva de los municipios**, pues una es la obligación de pagar a ECOSALUD la renta estatal o regalía por el ejercicio de una actividad que sólo puede desarrollar la Nación, a cargo de quienes en su nombre están autorizados para explotar los juegos de suerte y azar, y otra la de pagar a los municipios el impuesto de juegos permitidos en razón de la actividad sujeta a monopolio»<sup>2</sup>.* (Negrillas fuera de texto)

<sup>1</sup> La sentencia declaró la exequibilidad de los artículos 12 de la Ley 69 de 1946, 3 de la Ley 33 de 1968 y 227 y 228 del Dcto. Ley 1333 de 1986.

<sup>2</sup> Sentencia de 14 de julio de 2005, Exp. 15072, M.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz. Debe precisarse que mediante el artículo 39 de la Ley 643 de 2001, se ordenó la liquidación de ECOSALUD y se dispuso la creación de la empresa industrial y comercial del Estado denominada Empresa Territorial para la Salud ETESA, cuya supresión y liquidación fue dispuesta mediante el Decreto 146 de 2004 y, en su lugar, por Decreto 4142 de 2011, se creó la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, denominada COLJUEGOS, como una Empresa descentralizada del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

*Ahora bien, debe precisarse en este punto, que el ente demandado en el escrito de contestación transcribió apartes de varias sentencias de esta Sección en las que se sostuvo que no existe incompatibilidad entre el concepto fiscal del monopolio de juegos de suerte de azar y la facultad impositiva de los municipios, pero debe aclararse que dichas sentencias se refirieron al impuesto de juegos permitidos, al cual se ha hecho referencia y no al impuesto de industria y comercio que es el que se regula en la norma demandada en el presente proceso<sup>3</sup>.*

*La Corte Constitucional reiteró en la sentencia C-521 de 1997 la vigencia de las normas que establecen el impuesto sobre juegos permitidos y el alcance del artículo 336 CP., al declarar la exequibilidad de los artículos 6 de la Ley 1 de 1982 y 203 del Decreto 1222 de 1986 y 7, numeral 2, de la Ley 12 de 1932<sup>4</sup>. La mencionada Corporación señaló:*

***«Las disposiciones examinadas parten de la base de que la actividad de juegos y apuestas ya está gravada, en virtud de normas hace tiempo establecidas que fueron declaradas exequibles por esta Corte (Sentencia C-537 del 23 de noviembre de 1995. M.P.: Dr. Hernando Herrera Vergara), y lo que buscan, en razón del destino que se da a las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar (exclusivamente servicios de salud, según el artículo 336 C.P.), es que las entidades territoriales, dentro de una política tributaria general que corresponde trazar al legislador, no creen nuevos impuestos sobre ella.***

***Tal restricción no implica exención ni tratamiento preferencial alguno sobre impuestos ya creados, de propiedad de las entidades territoriales, sino la unificación del esquema tributario, lo cual encaja dentro de la indicada atribución legislativa».*** (Negritas fuera de texto)

*De acuerdo con la normativa legal y constitucional hasta aquí indicada, se puede establecer que los juegos de suerte de azar constituyen un monopolio rentístico, frente al cual la Nación, a través de los departamentos, municipios y el Distrito Capital, percibe las rentas obtenidas por la explotación de todas las modalidades de juegos de suerte y azar, las cuales deben ser destinadas al sector salud. Sin embargo, dicho monopolio no excluía el impuesto de juegos permitidos, que recaía sobre el valor de las boletas o tiquetes de toda clase de apuestas y que es de propiedad de los municipios sin una destinación específica, en virtud de normas cuya vigencia había sido reiterada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.*

*Ahora bien, el Legislador expidió la Ley 643 de 2001 «Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar», que en los artículos 49 y 60 dispone lo siguiente:*

<sup>3</sup> Aunque la parte demandada no identificó plenamente las sentencias transcritas en el escrito de contestación, se pudo determinar que se tratan de las proferidas el 14 de octubre de 2005, Exp. 13830, M.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié y el 30 de junio de 2005, Exp. 14394, M.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz. En la primera sentencia se analizó la legalidad de unos artículos del Acuerdo 016 de 1999 del municipio de Santiago de Cali que regulaban el impuesto de juegos permitidos y, en la segunda sentencia, la Sala estudió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra unos actos administrativos particulares, mediante los cuales la Administración municipal de Cali determinó el impuesto de juegos permitidos al demandante.

<sup>4</sup> Las normas analizadas por la Corte, prohíben a los municipios establecer impuestos directos o indirectos sobre los juegos permitidos y de apuestas permanentes.

**ARTÍCULO 49. Prohibición de gravar el monopolio.** Los juegos de suerte y azar a que se refiere la presente ley **no podrán ser gravados por los departamentos, distrito o municipios, con impuestos, tasas o contribuciones, fiscales o parafiscales distintos a los consagrados en la presente ley.** \*La explotación directa o a través de terceros de los juegos de suerte y azar de que trata la presente ley no constituye hecho generador del Impuesto sobre las Ventas IVA<sup>5</sup>.

Los Juegos de Suerte y Azar cuyos derechos de explotación no hayan sido establecidos en esta ley, causarán derechos de explotación equivalentes por lo menos, al diecisiete por ciento (17%) de los ingresos brutos.

(...)

**ARTÍCULO 60. Exclusividad y prevalencia del régimen propio.** Las disposiciones del régimen propio que contiene esta ley **regulan general e integralmente la actividad monopolística y tienen prevalencia, en el campo específico de su regulación, sobre las demás leyes, sin perjuicio de la aplicación del régimen tributario vigente.** (Negritas y subrayas fuera de texto)

Como se advierte, el artículo 49 transcrito es expreso en indicar que los juegos de suerte y azar no pueden ser gravados por los entes territoriales con tributos «distintos» a los establecidos en la misma Ley 643 de 2001, normativa que, en el Capítulo X, del que hace parte el mencionado artículo 49, prevé el régimen tributario para establecer únicamente impuestos a las loterías foráneas y sobre premios de lotería a favor de los departamentos y el Distrito Capital. (...)"

## 5. CONCLUSION

De conformidad con lo anterior, en relación a la documentación trasladada a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se puede colegir que la Revocatoria Oficiosa producida por la Administración Municipal de Jamundí, el día 10 de septiembre de 2013, en la Resolución No 036 de esa fecha, siendo el Alcalde Municipal de Jamundí – Valle del Cauca JOHN FREDDY PIMENTEL MURILLO, siendo Secretaria de Hacienda MARLENE MUÑOZ SANCHEZ y siendo Tesorero Municipal GUSTAVO ADOLFO HERRERA RIVERA, se encuentra ajustada al artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que al tenor del contenido del numeral 1, este acto administrativo era manifiestamente opuesto a la Ley.

De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-34-2016.

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y atentos a cualquier aclaración.

---

<sup>5</sup> \*\* El artículo 62 de la Ley 863 de 2003 suprimió este beneficio tributario.

En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada a la Carrera 6 entre Calles 9 y 10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada a través del correo electrónico [participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co](mailto:participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co) o directamente al link <https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1>

Cordialmente,

(Original firmada)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS  
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Copia: CACCI 3680 DC-34– 2016

[vivianacardenas@cdvc.gov.co](mailto:vivianacardenas@cdvc.gov.co)

Casimiro Delgado Larrahondo – [pjhon-@hotmail.com](mailto:pjhon-@hotmail.com) -Teléfono 3053204191 – Bogotá D.C.

Gloria Patricia Rincón Mazo- Contralora Delegada Economía y Finanzas Publicas-Edificio HSBC- Carrera 8 No.15-46 Piso 1 – Código Postal 111321- Bogotá D.C.

Iván Cepeda Castro- Carrera 7 #8-68 oficina 636B-638B –Bogotá D.C.

*Proyectó: Jaime Vergara Castrillón.-Profesional Universitario.  
Transcribió: Amparo Collazos Polo –Profesional Especializada*